

debe hacerse por la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia.

La regla anterior tiene una excepcion que se refiere á los juicios de contrabando, respecto de los cuales no rige el principio de que precisamente tengan dos instancias, y en los que por consiguiente la ejecutoria puede causarse ya en la 1ª, ya en la segunda ó bien en la 3ª instancia. La pauta de comisos que ha establecido esta regla para el comercio interior y la ordenanza general de aduanas marítimas que la aceptó para el comercio exterior, han debido adoptar, y en efecto adoptaron la de que en estos juicios la revision del proceso se haga por el superior inmediato de la instancia en que se causó la ejecutoria. Esto no debe parecer extraño porque los juicios de comiso no son criminales en el sentido propio y riguroso de la palabra. Lo que realmente se versa en ellos, es el interés pecuniario del fisco; y la accion penal queda reservada para el juicio criminal de contrabando que debe abrirse inmediatamente despues del de comiso; y este juicio criminal queda, en punto á revision, sujeto á las prescripciones del art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826.

De lo expuesto resulta como regla general, que toda sentencia en causa criminal que cause ejecutoria en 2ª instancia, debe elevarse á la Suprema Corte de Justicia para la revision del proceso; y que si este precepto no comprende á los juicios de comiso, es porque en ellos domina el carácter civil, mas que el criminal.

En estos términos creo que debe contarse al tribunal de Circuito de Guadalajara la consulta que contiene su nota de 10 de Agosto; y convendría tambien comunicar la resolusion á todos los tribunales de Circuito para que cumplan el deber que les impone el art. 34 tantas veces citado de la ley de 14 de Febrero de 1826.

México, treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*"

Dada cuenta de este pedimento se acordó lo siguiente:

"México, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Trascribáse al tribunal de Circuito de Guadalajara en respuesta á su comunicacion relativa, y á los otros siete tribunales de Circuito, para que procedan segun lo expuesto en este pedimento conforme á la ley. Publíquese.—Una rúbrica.—*Aguilar*, secretario."

Lo que comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y libertad. México, veintidos de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. *Agustin Peralta*, oficial mayor.—C. redactor del "Semanario Judicial."—Presente.

## CONSULTA.

*La que hizo el promotor fiscal del tribunal de Circuito de Guadalajara, sobre la vigencia de varias leyes federales, pedimento del C. procurador general sobre dicha consulta, y acuerdo de la Suprema Corte de Justicia.*

El C. Promotor fiscal del tribunal de Circuito de Guadalajara con fecha 8 de Agosto próximo pasado, dirigió á esta Corte Suprema de Justicia la siguiente comunicacion.

"Antes de expedirse en la última dictadura de D. Antonio Lopez de Santa Anna, la ley de 23 de Julio de 1853, los tribunales de la federacion ajustaban sus procedimientos judiciales á las leyes de 14 de Febrero y 20 de Mayo de 1826, 22 de Mayo de 1834 y 23 de Mayo de 1837.

La ley de 23 de Noviembre de 1855 dispuso en su art. 1º que: los tribunales ajustaran sus procedimientos á las leyes que regian con anterioridad á 31 de Diciembre de 1852, y en su art. 77 derogó

todas las que con posterioridad á esa fecha se habian expedido.

En virtud de esas disposiciones los tribunales de la federacion residentes en esta ciudad ajustaran sus procedimientos á las enunciadas leyes de 1826, 1834, 1837 y 1855.

En 4 de Mayo de 1857 se expidió una ley para arreglar los procedimientos judiciales en los negocios que se sigan en los tribunales y juzgados del Distrito y territorios; y como tal es título y mote de esa ley en todas sus ediciones oficiales, siendo la última la contenida en la página 35 de la memoria del ministerio de justicia é instruccion pública de 15 de Noviembre de 1869, se siguieron uniforme y constantemente observando por estos tribunales aquellas leyes, sin tener la de 4 de Mayo de 1857, mas que como pura doctrina en los huecos de que adolecen las otras.

Repentinamente y sin motivo justificado estos tribunales han declarado en sus sentencias vigente esa ley de Mayo é insubistentes las otras.

El que suscribe entiende, que los magistrados y jueces que han obrado así comprometen su responsabilidad, y no queriendo participar de ella el que habla, cumple con su deber exponiendo el caso á esa Suprema Corte para que determine lo que á bien tenga.

Debe llamar la atencion de la misma Suprema Corte sobre este punto que afecta la conveniencia pública y las libertades individuales. Por el art. 137 de la ley de 23 de Mayo de 1837, la sentencia de 2ª instancia causa ejecutoria cuando el interés del negocio no excede de mil pesos por el 136, la causa no excediendo de cuatro, si fuere conforme de toda conformidad con la de 1ª instancia, y por el 135, excediendo de esa suma hay lugar en todos casos á la tercera instancia.

El art. 77 de la ley de 4 de Mayo de 1857 está en absoluta contradiccion con esas disposiciones, porque por él, sea cual

fuere el interés que se ventila, la sentencia de 2ª instancia causa ejecutoria siendo conforme de toda conformidad con la de 1ª instancia.

La observancia del expresado art. 77, sobre importar infraccion de leyes vigentes, lo trae al erario el irreparable gravámen, como ha sucedido recientemente en algunos negocios de bastante cuantía, de no poder alegar ante esa Suprema Corte el agravio que lo hacen las sentencias de 2ª instancia. Además, en esos casos, no habiendo recurso ordinario de que hacer uso, ni pudiendo emplear el subsidiario de denegada súplica, porque tal artículo lo prohíbe y porque con cualquier pretexto se excusa este tribunal de expedir el certificado con que debe mejorarse; esa Suprema Corte no tiene ocasion de examinar y calificar la conducta de los tribunales y juzgados inferiores, si no es que los fiscales se resuelvan á acusar con frecuencia á los magistrados y jueces, lo cual no es posible, no solo por la odiosidad que engendra ese recurso, sino por la multitud de inconvenientes que presenta.

Sírvase vd. dar cuenta con lo expuesto á esa Suprema Corte, á fin de que si estima fundadas las observaciones que hago sobre el vigor en que están las leyes de 23 de Noviembre de 1855, 23 de Mayo de 1837, 22 de Mayo de 1834, 20 de Mayo y 14 de Febrero de 1826, se digne acordar lo que estime conveniente para su fiel observancia.

Esta comunicacion se mandó pasar al C. Procurador general de la Nacion, quien presentó el siguiente pedimento:

“El Procurador general de la Nacion dice: que el promotor fiscal del tribunal de Circuito de Guadalajara, ha dirigido con fecha 8 del corriente una nota contraida á pedir se declaren vigentes y se observen por los tribunales de la federacion las leyes de 14 de Febrero y 20 de Mayo de 1826, la de 23 de Noviembre de 1855, 23 de Mayo de 1837 y 22 de Mayo de 1834.

En opinion del que suscribe, no es de la competencia de la Suprema Corte de Justicia hacer declaraciones generales sobre la vigencia de las leyes. Hacer semejantes declaraciones corresponde indudablemente al poder legislativo; y la mision de los tribunales se reduce á aplicar en los casos occurrentes aquellas leyes que consideren vigentes.

Supuesta esta aclaracion, solo por via de reseña histórica puede decirse cuáles son las leyes que esta Suprema Corte ha considerado vigentes en el órden federal; y estas son las que pasa á indicar el que suscribe.

Se ha considerado vigente en negocios de estricto órden federal, la ley de 14 de Febrero de 1826, y tambien se considera vigente la de 20 de Mayo del mismo año aunque refundida en la de 22 de Mayo de 1834. Respecto de esta última es preciso advertir: que su vigencia se entiende en todo lo que no pugne con el órden político que actualmente rige en el país.

Hay negocios comunes cuyo conocimiento, por razones especiales que no es del caso referir, corresponde á los tribunales de la federacion. Para esta clase de negocios se considera vigente la ley de 4 de Mayo de 1857; porque siendo accidental el conocimiento de los tribunales federales, parece lógico que en ellos se atengan á las prescripciones del derecho comun.

Las leyes de 23 de Noviembre de 1855 y 23 de Mayo de 1837, solo se consideran vigentes en cuanto están conformes con la de 14 de Febrero de 1826 y 22 de Mayo de 1834 en el órden federal, y con la de 4 de Mayo de 1857 en el órden comun. Tambien suelen estimarse vigentes en algunas de sus prescripciones que no tienen concordantes con las de 14 de Febrero de 1826, 22 de Mayo de 1834 y 4 de Mayo de 1857, y que además no pugnan con el sistema federativo. Aunque á juicio del que suscribe esta opinion tiene sus dificultades y en la práctica puede tropezar con grandes inconvenientes, no puede menos <sup>graves</sup> ~~que~~ reconocer que las leyes de Noviembre de

1855 y Mayo de 1837 pueden y deben ser aplicadas en aquellos puntos que no tienen concordantes con las arriba citadas de Febrero de 1826, Mayo de 1834 y Mayo de 1857; y por otra parte no se oponen al sistema federativo vigente ni á la organizacion actual de los tribunales de la federacion.

No cabe duda en que el medio mas eficaz y expedito sería expedir una ley de procedimientos en el órden federal, en que se refundiesen y armonizasen los preceptos de todas las que se consideran vigentes; pero mientras no se espida tal ley, es indispensable sujetarse á la ordenacion que queda indicada.

He estendido esta opinion obedeciendo en lo posible el precepto de la Suprema Corte de Justicia, pero insisto en que esta debe abstenerse de hacer declaraciones generales sobre la vigencia de las leyes."

Al anterior pedimento se acordó lo siguiente:

"México, Diciembre 19 de 1871.

Trascribáse al promotor fiscal del tribunal de Circuito de Guadalajara en respuesta á su comunicacion relativa; manifestándole que la Corte ha procedido y procede conforme á la opinion expuesta en este pedimento. Publíquese la comunicacion del promotor, el pedimento del procurador y este acuerdo."

Y en cumplimiento de lo mandado lo comunico á V. para su publicacion en ese periódico.

Independencia y Libertad.—México veintidos de Diciembre de 1871.—*Lic Agustín Peralta*, oficial mayor.—C. Redactor del Semanario Judicial.—Presente.